

LOS INGRESOS Y GASTOS PROCEDENTES DE LAS RENTAS PROVINCIALES, 1768-1784

M.^a DEL CARMEN ANGULO TEJA

Universidad de Castilla-La Mancha

RESUMEN

Las rentas provinciales eran un grupo de impuestos, en su mayor parte indirectos, que proporcionaron una parte importante de las recaudaciones de la real hacienda y que han sido criticadas sobre todo por ser un obstáculo para el crecimiento económico. Frente a los estudios realizados sobre ellas hasta el momento, que generalmente utilizan ingresos netos sin distribuir por provincias, en este trabajo se analizan los valores (ingresos brutos), gastos de administración y líquidos obtenidos de las relaciones generales que formaban los administradores de las provincias y que se encuentran en el Archivo General de Simancas. A partir de ellos es posible obtener nuevas conclusiones sobre la evolución cuantitativa de estos impuestos y su influencia sobre el desarrollo económico de la corona de Castilla en el siglo XVIII.

ABSTRACT

The «rentas provinciales» were a group of indirect taxes that provided an important part of the Spanish fiscal revenues. This taxes were criticized specially for being a constraint upon economic development. Several studies about «rentas provinciales» have used net revenues, in most cases not distributed among the twenty-two Castile provinces. This article shows gross revenues, administrative costs and net revenues obtained from «relaciones generales de valores» made by «administradores generales de las provincias», available at Archivo General de Simancas. Using this data, it is possible to obtain

N. de E.: Fecha de recepción del artículo: julio, 2001.

Fecha de aprobación por el Consejo de Redacción: junio, 2002.

new conclusions about the quantitative evolution of this taxes and about its influence in the economic growth of the Castile Crown in XVIIIth-century.

JEL Classification: H220, N43, O23

INTRODUCCIÓN

El «sistema» tributario español del siglo XVIII lo formaba un gran número de impuestos, en su mayor parte indirectos, que no se percibían de forma homogénea en todo el Reino ni gravaban con igualdad a todos los contribuyentes, y que habían ido surgiendo a medida que se necesitaban nuevos ingresos con los que atender al aumento de los gastos, muy influido por los de defensa. De manera sintética, podemos decir que estas exacciones han sido criticadas por gravar a los contribuyentes sin tener en cuenta su renta o patrimonio —«capacidad de pago»—, por sus procedimientos de recaudación, por su costosa administración, por su falta de elasticidad con relación al gasto público y, especialmente, por considerarlas perjudiciales para el crecimiento económico. La mayor parte de los ingresos fiscales de la real hacienda provenían de unos pocos grupos de impuestos, rentas provinciales, estancos y rentas generales o de aduanas. Por ello, el estudio de las rentas provinciales, que proporcionaron una parte sustancial de las recaudaciones líquidas en el siglo XVIII, permite contrastar con la información disponible algunas de las opiniones negativas sobre la hacienda pública del antiguo régimen.

En estas páginas se analizan las rentas provinciales de la corona de Castilla entre 1768 y 1784 partiendo de las cifras que proporcionan las relaciones generales de valores, gastos y líquido de rentas reales y de millones, hechas por los administradores de las rentas provinciales en cada provincia y que constan en la documentación que guarda el Archivo General de Simancas. Esta fuente permite estudiar, por provincias, ingresos brutos, gastos de administración e ingresos líquidos, a diferencia de estudios anteriores, que se basan en su mayoría en datos agregados de valores líquidos. La utilización de estos últimos puede conducir a conclusiones erróneas, porque las rentas provinciales no fueron un conjunto uniforme durante el siglo XVIII, sino que se suprimieron y se añadieron tributos, algunos de los cuales ya existían, y también porque aumentos en los ingresos líquidos pudieron deberse a la reducción de los gastos, y al contrario. Las cifras proporcionadas en este trabajo permiten valorar las críticas sobre el coste de administración de estas rentas y, analizando la evolución de sus recau-

daciones brutas y netas, verificar si se puede afirmar que estos tributos fueron un obstáculo al crecimiento económico de las veintidós provincias de la corona de Castilla en que se cobraban.

1. CONSIDERACIONES SOBRE LAS RENTAS PROVINCIALES Y FUENTES PARA SU ESTUDIO

Las rentas provinciales eran un conjunto de impuestos, en su mayor parte indirectos, que se cobraban en las veintidós provincias de la corona de Castilla, cuya composición varió, y que recayeron fundamentalmente sobre las compraventas (los derechos que se denominaban en la documentación de la época *rentas reales*) así como sobre el consumo (millones) de determinados bienes, aunque se incluyeron bajo este concepto tributos de diversa naturaleza ¹. Las formas de recaudarlas dieron lugar a diferencias

¹ Cuando comienza la administración directa de las rentas provinciales, en 1742, 1746 y 1750 según de qué provincia se trate, estos tributos estaban compuestos por los siguientes. En cuanto a los recogidos bajo la denominación de *rentas reales* existían unos de carácter general, que eran alcabalas, tercias reales, cientos antiguos y cientos renovados, situados, servicio ordinario y extraordinario y su quince al millar (que se extinguió por Real Decreto de 20 de septiembre de 1795 desde el 1 de enero siguiente —Archivo Histórico Nacional, Fondos Contemporáneos, Hacienda, Serie General, en adelante AHN, FC, libro 8047, p. 324—), además de la renta de la sosa y la barrilla (que se contabilizaba en relación aparte; desde la Resolución de 26 de diciembre de 1780 —AHN, FC, libro 8032, pp. 440-449— se liberó a esos productos del pago de los derechos de rentas provinciales, aunque no de los de rentas generales o de aduanas); otros que se cobraban sólo en casos excepcionales, martiniega (se encontraba enajenado en la mayor parte de los pueblos), galeotes, fueros, pontazgos, portazgos, yantar y lanzas; y otros particulares de alguna provincia, las rentas de la seda, del azúcar y de la abuela en Granada, el diezmo alcabalatorio de teja, cal, yeso y ladrillo de Guadalajara y la renta de yerbas de las órdenes militares. En lo referente a los *millones*, los generales eran 24 millones, 8.000 soldados, 3 millones, 1 millón (que recaían sobre el consumo de carnes, vino, vinagre, aceite, jabón y velas de sebo) y fiel medidor (sobre vino, vinagre y aceite), y los particulares, la renta de patahendida (que correspondía a millones por la «extracción» a las provincias exentas y se contabilizaba en Burgos), el millón del azúcar de Granada y la renta de velas de sebo de Madrid (que figuraban en relación independiente de las del resto de millones de estas provincias). En 1751 se agregó a la administración general de rentas provinciales la renta de las ferias de Torrejón de Velasco (Real Orden de 23 de febrero de 1750 —Archivo General de Simancas, Dirección General del Tesoro, en adelante AGS, DGT, inventario 24, legajo 649, núm. 300—) y se dispuso que pasase a administrarse por la real hacienda el diezmo del aceite del aljarafe y ribera de Sevilla (Real Resolución de 20 de diciembre de 1751 —AHN, FC, legajo 8018, pp. 389-394—), que no se contabilizará en las relaciones generales de rentas reales de este reino hasta el año 1781 (en virtud de la Real Resolución de 30 de octubre —AHN, FC, libro 8032, pp. 710a-710d y 712, 713 y 721—). En 1760 se incorpora la renta de la población de Granada [Real Decreto de 8 de agosto —Francisco Gallardo

entre la definición de los impuestos y su aplicación en la práctica que se han de tener en cuenta a la hora de evaluar los efectos de las mismas sobre la actividad económica². Estos derechos proporcionaron la parte más importante de las recaudaciones de la real hacienda, entre un 17 y un 27 por 100 según la época, aunque fueron perdiendo peso relativo

Fernández (1805-1808), t. III, p. 286, y Juan de la Ripia y Diego María Gallard (1795-1796), t. IV, p. 14)], que se contabilizará aparte de las rentas reales. En 1761 se dispone que el quinto y el millón de la nieve, la renta de la extracción y regalía de Sevilla y la de lo cargado por el río de esta ciudad, que formaban parte de las «siete rentillas» pasasen a administrarse con las rentas provinciales (Real Decreto de 21 de febrero —AHN, FC, libro 8022, pp. 35-36—), pero sólo se contabilizarán el primero en las relaciones de rentas reales, el segundo en las de millones, la de la extracción y regalía en las de rentas reales de Sevilla y la del cargado y millón en las de millones de esta provincia desde 1781 (Real Resolución citada de 30 de octubre). A partir de este último año también se contabiliza en las relaciones de millones la renta o cuota del aguardiente (su estanco se había sustituido por Real Decreto de 19 de julio de 1746 —AHN, FC, libro 8015, pp. 396-399— por una cuota equivalente a lo que importaba, pero se anotaba en relaciones independientes). El Real Decreto de 29 de junio de 1785 (AHN, FC, libro 8036, pp. 228-242) y los Reglamentos de 14 y 26 de diciembre siguiente (AHN, FC, libro 8036, pp. 527-536 y 545-554, respectivamente) establecen en las rentas reales los dos reales en arroba de lana fina y entrefina y ventas por menor durante el esquila, los derechos de consumo y la contribución de frutos civiles (en alguna ocasión se contabiliza en relación de ampliación), además de las bases y normas que rigen el derecho del 10 por 100 de géneros extranjeros (aunque anteriormente se cobraba un 10 por 100 de éstos), y en los millones los consumos durante los esquileos. Al finalizar el arrendamiento de la renta del jabón, por Real Resolución de 10 de septiembre de 1788 (AHN, FC, libro 8039, pp. 462-463), se dispone que se administre unida a las rentas provinciales desde 1789 (por Real Resolución de 22 de diciembre de 1788 —AHN, FC, libro 8039, pp. 591-598— se modifica su composición) y se contabiliza una parte en las rentas reales y otra en los millones. En la instrucción de 29 de enero de 1790 (AHN, FC, libro 8041, pp. 77-86) se establece el derecho de internación. Otros conceptos que también se contabilizan son incorporaciones o secuestros de rentas u oficios, denuncias y consignaciones de rentas. Para un estudio pormenorizado, ver M. Carmen Angulo (2000), pp. 35-214.

² Las formas fundamentales de recaudación eran las siguientes: *administración directa*, por los funcionarios de la hacienda; *arrendamiento* (mediante puja o subasta, se concedía la recaudación de una renta); *encabezamiento* (los contribuyentes o sus representantes legales se obligaban mancomunadamente a pagar una cantidad); *repartimiento* (sin obligación mancomunada). Un impuesto como la alcabala, por ejemplo, que en teoría era un derecho del 10 por 100 sobre las compraventas, podía convertirse en uno totalmente distinto si se recaudaba por encabezamiento, como solía hacerse en los pueblos y villas que no fuesen importantes, o si se cobraba por un *ajuste o convenio* entre los miembros de un gremio y los representantes de la real hacienda en una ciudad administrada directamente. Un estudio más completo de las formas de recaudación, en Modesto Ulloa (1977), pp. 115-118 y 185-186. Ver también Juan de la Ripia y Diego María Gallard (1795-1796), t. I, pp. 204-257, y t. II, pp. 110-149 y 154-160; Francisco Gallardo (1805-1808), t. IV, pp. 64-80; y M. Carmen Angulo (2000), pp. 66-73.

durante la segunda mitad del siglo XVIII³ y fueron objeto de numerosas críticas que se acrecentaron en este siglo y crearon un estado de opinión que contribuyó, con la idea de mejorar la equidad del sistema impositivo y de estimular el desarrollo económico, a impulsar el intento de sustituirlas en 1749 por la «única contribución»⁴ y al establecimiento en 1785 de

³ Entre 1730 y 1742, la aportación media de las rentas provinciales a los ingresos líquidos de la real hacienda supuso un porcentaje del 27 por 100, la de las rentas generales y sus agregadas del 20 por 100 y la del tabaco 19 por 100 [AGS, Secretaría y Superintendencia de Hacienda (SSH), legajo 2354, datos que recoge Jaime García-Lombardero (1978), pp. 79-82]. Entre 1763 y 1807 las rentas provinciales supusieron un porcentaje medio del 17,38 de los «Ingresos Ordinarios de la Real Hacienda Española y Remesas de Indias», el tabaco del 15,18, las rentas generales del 14,8 y la renta de Indias del 13,85 [calculado a partir del cuadro que realiza Carlos Marichal (1997), p. 479, tomando cifras netas de José Patricio Merino (1987)]. Si estudiamos utilizando los mismos datos de Merino, como hace Pedro Tedde de Lorca (1989), un periodo más corto, 1775-1792, las rentas generales aportaron a las rentas ordinarias de la corona un porcentaje mayor que el de las provinciales (el 20 por 100 las primeras y el 17 por 100 las otras) y los estancos de tabaco y salinas, juntos, el 22 por 100 (p. 169). Ya señala Pedro Tedde en la p. 216 que «El incremento de los ingresos tributarios posteriores a 1784 fue, sobre todo, debido al incremento de las rentas generales...», año a partir del cual éstas superaron a las provinciales.

⁴ En muchas ocasiones se había abogado por una contribución de carácter único. Por Decreto de 10 de octubre de 1749 (AHN, FC, libro 8017, pp. 251-274) se inicia este proyecto, que pretendía sustituir a las rentas provinciales por un impuesto parecido al que se había establecido en 1716 en Cataluña para el reparto del «equivalente» de las rentas provinciales que recibió allí el nombre de «catastro», dado, según parece, que en el principado se había producido un crecimiento económico tras la implantación de este tributo. En el «catastro» de Cataluña se habían efectuado dos clases de reparto, uno sobre el valor de las haciendas (real) y otro sobre los rendimientos del trabajo y de las actividades comerciales e industriales (personal). Para aplicar la «única contribución» se comenzó a realizar el que recibió el nombre de «catastro del marqués de la Ensenada», con el fin de obtener información sobre la riqueza y la población de las veintidós provincias de la corona de Castilla. Tras su elaboración, se puso en vigor este nuevo impuesto por tres Decretos de 4 de julio de 1770 (AHN, FC, libro 8027, pp. 109-183). Pero los problemas derivados de su puesta en práctica hicieron que se cancelase definitivamente en 1776. El estudio más completo del mismo se encuentra en Antonio Matilla Tascón (1947). Gonzalo Anes proporciona un magnífico resumen en pp. 23-26 de (1974) y en las 8-10 de (1990). Ver también José López Juana Pinilla (1840-1848), t. V, pp. 317-489; José Canga Argüelles (1968), t. II, p. 548; Juan Hernández Andreu (1971 y 1972); Joseph Fontana (1971), pp. 111-119, y (1973), pp. 29-36; Vicente Llobart (1976); Dolores Mateos Dorado (1981 y 1990); Miguel Artola (1982), pp. 267-279; J. M. Donézar Díez de Ulzurrun (1984), pp. 6-10, y (1989); Miguel Artola y Jesús Martín Niño (1988), pp. 174-175; Concepción Camarero Bullón (1993), pp. 51-97; Fernando López Castellano (1995), pp. 27-52; y Pedro Tedde de Lorca (1998), pp. 342-346. Esta reforma se analiza en Extremadura en Alfonso Otazu (1978). Sobre los principales rasgos de la organización tributaria y la evolución del sistema impositivo en el siglo XVIII, ver las síntesis de Tomás García-Cuenca Ariati (1990), pp. 27-28, y (1991), pp. 63-68.

la «contribución de frutos civiles»⁵. Estas críticas continuaron hasta la abolición definitiva de este impuesto en la reforma de Mon-Santillán de 1845 y se siguen planteando en la actualidad. Las principales, que se habían centrado especialmente en las alcabalas⁶, se podrían resumir en su insuficiente capacidad recaudatoria, que recaían sobre los más «pobres» (que

⁵ Se establece por Real Decreto de 29 de junio, instrucción provisional de 21 de septiembre y Reglamentos provisionales de 14 y 26 de diciembre de 1785 (citados en la nota 1, salvo la instrucción, que se encuentra en AHN, FC, libro 8036, pp. 342-357). Por Real Decreto de 29 de agosto de 1794 [Francisco Gallardo Fernández (1805-1808), t. III, pp. 318-320, y Juan de la Rípiá y Diego María Gallard (1795-1796), t. I, pp. 50-53] se suprime y se sustituye por otro de carácter «extraordinario y temporal», que se deroga por Decreto de las Cortes extraordinarias de 13 de septiembre de 1813 [José López Juana Pinilla (1840-1848), t. III, pp. 14-21]. Se vuelve a establecer por Real Decreto de 23 de junio de 1814 [José López Juana Pinilla (1840-1848), t. III, p. 21], a derogar en 1817 [Real Decreto de 30 de mayo —José López Juana Pinilla (1840-1848), t. III, p. 25—], se reinstaura, aunque modificada, en 1824 [Decreto de 16 de febrero —José López Juana Pinilla (1840-1848), t. III, p. 31—], desapareciendo definitivamente en la reforma de 1845. Era un impuesto directo sobre los arrendamientos de tierras, fincas, derechos reales y jurisdiccionales. Ver Gonzalo Anes (1974), pp. 26-45, y (1990), 10-12, y también Juan de la Rípiá y Diego María Gallard (1795-1796), t. I, pp. 19-20, 32-33, 45-46 y 57-59, y t. III, pp. 338-343 y 353-354; Francisco Gallardo Fernández (1805-1808), t. III, pp. 317-329; José Ganga Argüelles (1968), t. I, p. 428; Juan Hernández Andreu (1972); Miguel Artola y Jesús Martín Niño (1988), pp. 175-176; Fernando López Castellano (1995), pp. 52-67; Pedro Tedde de Lorca (1998), pp. 347-351; y M. Carmen Angulo (2000), pp. 58-66.

⁶ Aunque ya en fecha temprana Ramón Carande (1945) en el mismo título de su artículo había sostenido la hipótesis de que las alcabalas eran «llevaderas». Como muestra de las numerosas críticas se puede señalar que Enrique Fuentes Quintana (1964) escribe: «Muy pocos autores que se estimen de economistas o los que con propósitos de mejorar la Hacienda Real repasen los ingresos públicos, dejan de sentenciar a la alcabala como tributo beligerante contrario al mantenimiento de la *potencia nacional*, al *desarrollo económico*, y causante incluso de la *decadencia económica* de España. Esto es, mercantilistas, escritores liberales clásicos y arbitristas condenan el impuesto igualmente, aunque sus juicios y valoraciones sean diversos» (p. 12) y, como «exponentes de estas tres direcciones», analiza el pensamiento de Jerónimo de Uztáriz, el de Adam Smith y remite al trabajo de José Luis Sureda Carrión (1949) sobre los economistas del siglo xvii. Antonio Matilla Tascón (1947), al estudiar la «única contribución», señala la gran cantidad de empleados que era necesaria para la administración de las rentas provinciales, los privilegios que tenían los arrendadores, las arbitrariedades en los repartimientos, los proyectos de los siglos xv, xvi, xvii y principios del xviii de unificación de las contribuciones (pp. 15-28) y en las pp. 43-60 recoge las críticas de Miguel de Zabala y Auñón y sus efectos hasta el establecimiento del proyecto. Gonzalo Anes (1974), al tratar la «contribución sobre frutos civiles», analiza también las efectuadas por Miguel Zabala y Auñón y D. Cenón de Somodevilla, entre otras. Ver también Ricardo Calle Saiz (1978), especialmente el artículo reproducido en las pp. 195-267, donde se estudia el pensamiento de los principales economistas liberales españoles, y Juan Hernández Andreu (1971) y (1972). Estudios recientes, como el de Sureda o el de Juan Hernández Andreu, se recogen en Enrique Fuentes Quintana (1999a) y (1999b), pp. 523-543 y 569-579, respectivamente. Son interesantes las voces «Debate sobre la contribución única (siglo xviii), El» y «Debate sobre la decadencia de Castilla (siglo xvii), El», en Luis Perdiges y John Reeder (2000), pp. 120-132.

eran los que tenían que acudir a proveerse a los puestos públicos), que existía un elevado número de «privilegiados» respecto a su pago, que su administración era costosa, que fomentaban el contrabando, que perjudicaban a la agricultura y a las manufacturas y que limitaban el tráfico y el comercio interior ⁷.

Las principales aportaciones al estudio cuantitativo de las rentas provinciales, hechas en su mayor parte dentro de un análisis de carácter más general, se basan en datos agregados y parten, en su mayoría, de valores líquidos tomados de resúmenes efectuados en las contadurías o en la superintendencia general de hacienda ⁸, o por contemporáneos del siglo XVIII, del XIX ⁹, o de

⁷ También, cuando no se administraban directamente por la real hacienda, sino que estaban arrendadas, se criticaban los abusos de los recaudadores. José Canga Argüelles (1968) recoge críticas a los arrendadores en t. I, pp. 95-97.

⁸ Pablo Fernández Albaladejo (1977), pp. 56-58 y 77, Jaime García-Lombardero (1978), pp. 79-82, y Juan Zafra (1991), pp. 201-202, utilizan los datos que figuran en un cuadro titulado «Noticia del valor líquido que tuvieron todas las rentas y ramos de la real hacienda... desde el (año) de 1730 hasta el de 1742...», citado en la nota 3 (AGS, SSH, legajo 2354). El primero los recoge sin distribuir por provincias, y de él los toma Miguel Artola (1982), p. 306. Juan Zafra (1991), p. 202, añade a los señalados anteriormente, los de los años 1743 a 1750, obtenidos de una relación del valor líquido de todas las rentas entre 1739 y 1750 que está en AGS, DGT, inventario 37, legajo 11 (hay otra igual, pero con menos errores, en el inventario 24, legajo 1230). Pablo Fernández Albaladejo (1977), p. 77, nos ofrece, de AGS, SSH, legajo 2354, un «Estado del valor de las Rentas de S. M. ... correspondientes al año de 1751, con parificación del que tuvieron en el de 1750, baxados Juros, Salarios y demas costas», y del legajo 293 otro «Estado de los productos que en un Quinquenio, comprendido desde el año de 1774 hasta el de 1778... han entrado efectivos en la Tesorería maior de la Guerra...». Un «Estado de las rentas provinciales de Castilla en 1787, formado en la Superintendencia General de la Hacienda» lo recoge Canga Argüelles (1968), en t. II, p. 403; de éste lo toman Miguel Artola (1982), pp. 303-304, y Juan Zafra (1991), p. 210. A veces resulta complicado saber si algunos datos son brutos o netos. Ver nota 15 de M. Carmen Angulo (2000), pp. 221-222.

⁹ Didier Ozanam (1980) reproduce los «Valores líquidos que produjeron todas las rentas de S. M. en el año de 1742 cotejados con los que rindieron en 1750», tomados de la «Representación hecha al Sr. D. Fernando VI por su ministro el...», proponiendo medios para el adelantamiento de la Monarquía y buen gobierno de ella (1751)», que se puede encontrar en Antonio Valladares de Sotomayor (1788). Miguel Artola (1982), pp. 302 y 303-304, y Juan Zafra (1991), p. 207, recogen los datos de «antes de 1714» y 1722 que publica Gerónimo de Uztáriz (1968), pp. 377-389. También figuran los de 1722 en José Canga Argüelles (1968), t. II, pp. 444-445 (resumidos, sin dividir por provincias). De Pedro Lerena (1792) obtiene José Canga Argüelles (1968), t. II, p. 402, y de éste Miguel Artola (1982), pp. 303-304, un «Estado del valor y gastos de recaudación de las rentas provinciales en tiempo de su arrendamiento» (no incluye Madrid). Partiendo de Diego María Gallard (1787), p. 266, proporciona Juan Zafra (1991), p. 210, un «Extracto del valor por mayor y líquido para la Real Hacienda, que tuvieron en el año de 1768 las Rentas Provinciales y sus agregadas...» y en la misma página añade otro de los «valores de las rentas provinciales de Castilla y Aragón, que el Sr. D. Diego Gardoqui acompañó á su memoria de 19 de octubre de 1792», que toma de José Canga Argüelles (1968), t. II, p. 403. De José López

cuentas de tesorería¹⁰, además de que no siempre permiten estudiar su distribución por provincias¹¹.

Los análisis realizados a partir de estas fuentes presentan inconvenientes. Por una parte, cuando se estudian valores líquidos, para obtener los brutos hay que estimar las cantidades deducidas, las cuales normalmente incluyen, además de gastos de administración, otras cargas, como juros, cantidades abonadas por conducción del dinero a la corte y otras. Por ello, aumentos en los ingresos pueden deberse, no al incremento de las recaudaciones totales sino a la reducción de gastos o cargas¹², a incor-

Juana Pinilla (1825) obtiene Miguel Artola (1982) valores líquidos de rentas provinciales entre 1750 y 1779 (p. 306) y entre 1783 y 1790 (p. 351), además de «extrapolar» el valor por mayor de 1779 a 1806, al que añade el bruto de 1807 (p. 349). En la p. 351 también compara los valores líquidos de Pinilla entre 1783 y 1790 con los de las mismas fechas que recoge de Diego Gardoqui (AHN, Hacienda, legajo 3472) y los íntegros calculados a partir de Pinilla entre 1792 y 1796 con los de Caamaño y Pardo (1798). José López Juana Pinilla (1816) nos ofrece en el apéndice 3 el valor entero, los salarios y gastos, el caudal pagado por juros y recompensas y el líquido para la Real hacienda de estas rentas entre 1776 y 1790 y la media del quinquenio 1793/1797, datos citados, aunque no recogidos, por Joseph Fontana (1976), p. 275, nota 6.

¹⁰ Las cifras del AGS, DGT, inventario 16, guión 19, legajos 48-79, fueron utilizadas por Javier Cuenca Esteban (1981), pp. 190-195, para su estudio sobre los ingresos netos entre 1788 y 1820 y los del guión 24 (se basa en el legajo 49, que completa con el guión 19 y con el legajo 1608-B del Archivo Nacional de París, AF IV9) por José Patricio Merino (1987), pp. 37-89, para el periodo 1763-1820. Del Tribunal Mayor de Cuentas, legajos 2038 a 2150, y de la DGT, inventario 16, guión 19, legajos 22-48, obtiene Renate Pieper (1992) los datos que recoge en las pp. 217-387 y que se encuentran resumidos en el cuadro que figura en las pp. 105-106. Juan Zafra (1991), en cambio, utiliza cuentas, no de Tesorería General como los anteriores, sino de tesoreros provinciales, para estudiar el reino de Granada (pp. 211-240 y 275-298). Las cifras de José Patricio Merino han sido estudiadas también por Pedro Tedde de Lorca (1989) —periodo 1775-1792, p. 169— y (1998) —entre 1763 y 1788, pp. 356 ss., y en el reinado de Carlos IV, pp. 372 ss.— y por Carlos Marichal (1997), 1763-1807, p. 479.

¹¹ Ver, de los citados anteriormente, Pablo Fernández Albaladejo (1977); Javier Cuenca (1981); Miguel Artola (1982), pp. 306, 349 y 351; José Patricio Merino (1987); Pedro Tedde de Lorca (1989) y (1998); Carlos Marichal (1997), y José Canga Argüelles (1968), pp. 444-445. Renate Pieper (1992) distribuye los ingresos por regiones.

¹² Miguel Artola (1982) ya señala el problema de que «un aumento de la deuda, consecuencia de nuevas situaciones de juros, podía bastar para que el producto líquido de la renta quedase estabilizado, cuando en realidad se había dado un crecimiento del producto fiscal», e indica que las cifras globales que proporciona Fernández Albaladejo para los años 1730/1742 (que son los totales de los datos que García-Lombardero recoge) «deberían ser reevaluadas en torno al 25 por 100, si tomamos como base el haber de juros que Uztáriz describe existían en 1722» (pp. 305-306). En la p. 216 de M. Carmen Angulo (2000) se comprueba, partiendo de los datos de Gerónimo de Uztáriz (1968) citados en la nota 9 que entre 1714 y 1722 «se produce un aumento de los juros bastante superior al de los ingresos, por lo que el resultado líquido se incrementa en una menor proporción que el valor de las rentas». Ver también la nota 11 de la p. 57 de Pablo Fernández Albaladejo

poraciones de rentas o a la contabilización de otras que figuraban separadas¹³. Además, su comparación es muy complicada cuando proceden de fuentes distintas porque las deducciones pueden no ser las mismas, o no ser homogéneos los valores brutos¹⁴. De hecho, se observan grandes discrepancias en muchos casos entre unas fuentes y otras¹⁵. Por otra parte, cuando no están distribuidos por provincias, se pueden obtener conclusiones que enmascaren diferencias regionales, además de no ser posible calcular la participación de cada una y los efectos sobre ellas.

En este trabajo de investigación se utilizan datos brutos, además de gastos de administración y líquidos, obtenidos de las relaciones generales de valores que formaban los administradores generales de rentas provin-

(1977), que explica que los valores líquidos no son «homologables exactamente a nuestros netos» y remite a las advertencias de Joseph Fontana en las notas 1 y 7, pp. 273 y 275, de la selección de documentos que realiza en *Hacienda Pública Española* (1976). José Patricio Merino (1987) señala en la p. 14 que las cifras netas que estudia, correspondientes a cuentas de los Tesoreros generales no tienen en cuenta «los gastos de recaudación, los sueldos de los recaudadores y el peso de una parte de la deuda» (juros y cargas situados sobre las rentas) y añade que «Las cifras brutas deben corresponder a un 20 por 100 de aumento sobre esa base líquida» (p. 14). Los datos que figuran en el anexo 3 de M. Carmen Angulo (2000), pp. 264-322, en el que se recoge la distribución de los valores líquidos estimados de las rentas de la corona entre 1739 y 1750 (DGT, inventario 24, legajo 1230, e inventario 37, legajo 11, citado en la nota 8) reflejan, por una parte, que los valores líquidos finales de las rentas provinciales, es decir, descontados gastos de administración, además del haber de juros, el caudal de reducciones y lo abonado a los recaudadores por la cobranza del servicio ordinario y por conducciones del dinero entregado en la corte, podían ser, dependiendo de la provincia, menores que los valores descontados sólo los gastos de administración en porcentajes muy variables, cuyo abanico podía distar entre una provincia y otra hasta en 23 puntos. Y por otra, que, aun utilizando agregados, en los que podían compensarse las variaciones provinciales, los líquidos finales que acabo de citar podían ser menores que los otros (descontados sólo los gastos de administración) en un porcentaje superior al 20 que señala Merino o al 25 que indica Artola. Ver también las pp. 223 y 224 de M. Carmen Angulo (2000), en las que se recoge que, según los datos citados de Lerena (1790), en época del arrendamiento de las rentas provinciales (¿1749?) «la relación entre los gastos de administración y el producto por mayor variaba en las provincias entre un 7,76 en Valladolid y un 28,69 por 100 en Jaén»; que, según los de Diego María Gallard (1787), en 1768 el porcentaje de gastos (no se aclara su composición) con respecto al valor por mayor lo hacía entre un 2,76 en Zamora y un 13,02 en Jaén; y que según el «Estado de las rentas provinciales de Castilla de 1787...», citado en la nota 8, «los sueldos suponían unos porcentajes en cada provincia con respecto al íntegro que variaban entre un 3,84 en Soria y un 17,5 en Madrid».

¹³ Ver nota 1 y M. Carmen Angulo (2000), p. XV.

¹⁴ Ver M. Carmen Angulo (2000), pp. 218, 220, 224 y 225.

¹⁵ Miguel Artola (1982) lo señala en pp. 350-351. A veces resulta complicado saber si algunos datos son brutos o netos [ver nota 15 en M. Carmen Angulo (2000), pp. 221-222].

ciales en cada provincia y que se conservan en el Archivo General de Simancas ¹⁶.

En cada una de las provincias administradas directamente por la real hacienda, los administradores generales hacían, anualmente, teniendo en cuenta las respectivas relaciones que daban los administradores de los partidos que la componían, una relación de rentas reales y otra de millones en las que se recogían de forma pormenorizada los valores, salarios y gastos de administración, así como los líquidos. Junto a ellas, figuran otras de las rentas particulares de una provincia que se contabilizaban con separación

¹⁶ Se pueden encontrar en la Dirección General de Rentas (DGR), 1.^a remesa, legajos 2112 a 2280, junto con otra clase de cuentas diversas de administración y tesorería, totales o parciales, así como en la DGT, inventarios 24 (rentas reales) y 4 (millones). En la primera fuente citada, la documentación más tardía es de 1781 y no incluye Madrid, además de faltar algunos años intermedios. Por ello, he utilizado para este estudio la segunda, a la que he añadido, en aquellos años en que faltaba también en ésta alguna relación general de valores, las de la primera. Es de destacar que el análisis pormenorizado de estas relaciones permitiría conocer, además, el papel desempeñado por cada impuesto y su importancia relativa, qué bienes proporcionaban más ingresos, sobre qué consumidores recaían con mayor intensidad, y la incidencia sobre los contribuyentes de las distintas poblaciones. Juan Zafra (1991) realiza un estudio detallado de las rentas provinciales en el reino de Granada entre 1746 y 1780 utilizando las cuentas de las provincias, partidos y tesorería que también se conservan en la citada 1.^a remesa de la DGR. Su elección se basa, según indica en las pp. 119-120, en que son menos voluminosas que las relaciones generales de valores, en que se realiza una cuenta cada año en cada provincia y no dos (una de rentas reales y otra de servicios, como se puede ver en el párrafo siguiente), en que se presentan normalmente más tarde, por lo que incorporan también datos procedentes de las posteriores relaciones de ampliación y porque en la Contaduría de Cuentas se hacían cotejos y extractos anuales, que se realizaban «con criterios contables, igualando el “cargo” y la “data”» (p. 120). Además, en la página 118 sostiene que el cometido básicamente informativo y de control de las relaciones generales de valores queda limitado por la obligación de presentarlas en cuatro meses en Madrid, por limitarse también el plazo de presentación de las ampliaciones y porque el uso frecuente de éstas induce a confusión «debido a la falta de rigor aritmético observado en su liquidación» (p. 119). Esta última opinión no la comparto. Por otra parte, las relaciones de ampliación se encuentran, casi siempre, adjuntas a las relaciones generales de valores del año y provincia a la que se refieren, aunque he encontrado alguna junto con las de otros años y, sobre todo, las hay de fechas bastante posteriores a las limitaciones que indica (en la nota 26 de la página 118 reconoce que hay relaciones de valores fechadas con posterioridad en algunos meses a lo establecido). Como también señala Juan Zafra en la p. 121, en las cuentas de tesorería «Además, se suelen agregar cantidades correspondientes a conceptos fiscales heterogéneos, ya que, en definitiva, el fundamento de estas cuentas era registrar la entrada y la salida de fondos en las arcas de las provincias», lo que no sucede en las relaciones generales de valores, por lo que se pueden estudiar sus resúmenes de valores, gastos y líquido sin el peligro de que se encuentren contabilizadas partidas que no corresponden a rentas provinciales.

de las provinciales ¹⁷. A continuación, los contadores y escribanos de dichas rentas de la provincia certificaban la conformidad de la relación con los libros y papeles que cada uno tenía a su cargo y con los originales de los que no tenían, que les eran exhibidos y luego se devolvían al administrador general de la provincia. El contador principal de rentas provinciales del reino comprobaba y certificaba la conformidad del valor «por mayor», salarios, gastos y líquido con el original dado por el administrador general, que había sido certificado por el contador propietario de las referidas rentas y testimoniado por el escribano; hacía un resumen general al que añadía los gastos de la corte, que eran un prorrateo de los que se habían causado en la contaduría principal y en la dirección general; prevenía que, en caso de que hubiese alguna novedad que alterase el valor y los gastos referidos, se daría certificación de ampliación y remitía un escrito a la dirección general de rentas en el que comunicaba que las cuentas quedaban depositadas en la contaduría. Las relaciones de millones pasaban al fiscal, el cual las veía y sentaba en los libros del Consejo de Millones, o de éste en Sala de Única Contribución. En el proceso se tardaban varios meses ¹⁸.

2. RESULTADOS DEL ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LAS RENTAS PROVINCIALES, 1768 A 1784

De las relaciones generales de valores de las rentas reales y de los millones de cada provincia tomé, para los años 1768, 1772, 1776, 1780 y 1784, los valores por mayor, las ampliaciones, bajas, moderaciones y refacción ¹⁹ que en algunos casos se contabilizan antes de descontar los salarios y gastos, los valores por mayor resultantes de sumar o descontar éstas, los totales de salarios y gastos de administración, de gastos de la corte y los «líquidos para su majestad», a los que tuve que añadir o restar las relaciones de ampliación, positivas o negativas, cuando las había, para calcular el «líquido» resultante. En las rentas arrendadas de Madrid recogí, de las relaciones de valores

¹⁷ Renta de la población y renta del azúcar (millón de éste) en Granada y renta de la sosa y la barrilla en Murcia. Desde 1781 sólo la renta de la población de Granada se contabiliza con separación.

¹⁸ Para un estudio más detallado ver M. Carmen Angulo (2000), pp. 226-234.

¹⁹ Cantidad a restituir al estado eclesiástico correspondiente a lo que había contribuido de más en aquellos derechos reales de los que estaba exento. Ver Juan de la Ripia y Diego María Gallard (1795-1796), t. II, pp. 28-30 y 85-86; José López Juana Pinilla (1840-1848), t. II, pp. 167-168; Jaime García-Lombardero (1978), p. 71, y M. Carmen Angulo (2000), pp. 81, 190, 196 y 198-199. A veces también se incluye la refacción en los gastos de administración.

que presentaban los recaudadores²⁰, los precios que éstos estaban obligados a abonar a la real hacienda. Estas cifras se encuentran, sumadas, en el cuadro 1²¹, que refleja la evolución de las rentas provinciales en maravedíes de vellón. En él, los valores por mayor que se indican en cada provincia son los resultantes de sumar o restar las ampliaciones de valor, bajas, moderaciones y refacción contabilizadas antes de descontar salarios y gastos. El cuadro 2 muestra los totales en las veintidós provincias de la corona de Castilla de los valores por mayor (en Madrid, los precios de las rentas arrendadas), las bajas (incluyendo moderaciones y refacción), las ampliaciones positivas y negativas que se contabilizan tras éstas, los salarios y gastos de administración, los gastos de la corte, el «líquido para su majestad», las relaciones de ampliación que figuran aparte, junto con las relaciones generales de valores de rentas reales y millones, y el «líquido» final, indicándose, de cada una de estas magnitudes, las cifras correspondientes a rentas reales y a millones y la suma de ambas (rentas provinciales).

Del cuadro 1 se desprende que los salarios y los gastos de administración de las rentas provinciales evolucionaron de forma desigual en las distintas provincias²² y los de la corte disminuyeron, en la mayor parte de los casos, entre 1768 y 1780, para incrementarse en 1784, salvo en Cuenca²³. Teniendo

²⁰ Relaciones de valores presentadas por los diputados de rentas por los Cinco Gremios Mayores, a cuyo cargo estuvieron, en virtud de tres contratos que se fueron prorrogando, las rentas provinciales de esta ciudad, su provincia y partido (incluida la renta de velas de sebo del casco).

²¹ AGS, DGT, inv. 24, legs. 1261, 1277, 800, 1201, 806, 809, 1144, 1254, 1218, 1388, 1402, 1383, 1379, 1350, 1257, 1426, 1304, 937, 1424, 971, 836, 814, 1208, 1259, 820, 1129, 1356, 1237, 818, 1219, 1396, 1355, 1393, 1155, 816, 979 y 1360, y DGR, 1.ª remesa, legs. 2113, 2130, 2131, 2132, 2158, 2159, 2211 y 2212 (relaciones de rentas reales); y DGT, inv. 4, legs. 119, 151, 121, 153, 123, 155, 125, 157, 127 y 159 (relaciones de millones).

²² En Ávila aumentaron entre 1768 y 1784 más del 200 por 100. En Extremadura, Galicia, Guadalajara, Valladolid y Zamora se incrementaron entre el 40 y el 73 por 100. En Jaén, León, Murcia, Salamanca, Segovia, Sevilla y Toro entre el 10 y el 40 por 100. En Córdoba, Granada, Mancha, Soria y Toledo en porcentajes menores que el 10. En cambio, en Burgos, Cuenca y Palencia disminuyeron, aunque habían experimentado un pequeño crecimiento anteriormente.

²³ Se redujeron de forma generalizada entre 1768 y 1780 (sólo en Sevilla son en 1780 similares a los del año de partida, pero fueron menores en años anteriores), siendo de destacar el caso de Soria, cuya reducción es cercana al 50 por 100. En cambio, se incrementaron en 1784, con respecto a 1780, con la excepción de Cuenca. Pero, en la mayor parte de los casos, alcanzaron cifras inferiores a las de 1768 (Cuenca, Extremadura, Jaén, León, Murcia, Palencia, Segovia, Soria, Toledo, Toro, Valladolid y Palencia). Fueron superiores a los de 1768 hasta en un 10 por 100 en Ávila, Burgos, Córdoba, Guadalajara y Salamanca, entre un 11 y un 20 por 100 en Granada y Sevilla y en un 23 por 100 en Galicia. En la relación de Mancha no figuran estos gastos en 1784.

CUADRO 1

Distribución de las rentas provinciales en mrs.

<i>Rentas provinciales (mrs.)</i>	1768	1772	1776	1780	1784
<i>Ávila</i>					
Valor por mayor.....	63.485.204,0	63.469.171,0	63.441.281,5	67.013.467,0	68.174.426,0
Salarios y gastos.....	934.287,0	973.635,0	932.871,5	3.009.542,0	3.042.294,0
Gastos de la Corte.....	514.288,0	492.806,0	452.890,0	456.908,0	547.404,0
Líquido para su Majestad.	62.036.629,0	62.002.730,0	62.055.520,0	63.547.017,0	64.584.728,0
Relaciones de ampliación.	12.580,0	—	—	—	—
Líquido resultante	62.049.209,0	62.002.730,0	62.055.520,0	63.547.017,0	64.584.728,0
<i>Burgos</i>					
Valor por mayor.....	159.419.529,0	161.446.231,5	160.106.276,0	158.949.555,5	157.917.318,5
Salarios, gastos y bajas.....	6.692.825,0	6.950.408,0	7.054.696,5	6.928.421,5	6.104.688,0
Gastos de la Corte.....	1.183.386,0	1.227.338,0	1.203.670,0	1.086.520,0	1.245.904,0
Líquido para su Majestad.	151.543.318,0	153.268.485,5	151.847.909,5	150.934.614,0	150.566.726,5
Relaciones de ampliación.	2.183.863,0	500.368,0	433.670,0	436.222,0	—
Líquido resultante	153.727.181,0	153.768.853,5	152.281.579,5	151.370.836,0	150.566.726,5
<i>Córdoba</i>					
Valor por mayor.....	150.735.494,0	153.161.179,0	156.184.300,5	162.203.785,0	162.589.119,0
Salarios y gastos, bajas y moderaciones.....	18.610.390,0	18.104.157,0	18.527.866,5	20.488.595,0	19.069.495,5
Gastos de la Corte.....	1.206.014,0	1.144.994,0	1.050.754,0	1.071.686,0	1.315.576,0
Líquido para su Majestad.	130.919.090,0	133.912.028,0	136.605.680,0	140.643.504,0	142.204.047,5
Relaciones de ampliación.	18.262.931,0	16.168.297,5	545.763,0	— 164.510,0	— 358.220,0
Líquido resultante	149.182.021,0	150.080.325,5	137.151.443,0	140.478.994,0	141.845.827,5
<i>Cuenca</i>					
Valor por mayor.....	93.920.974,0	94.876.597,0	96.076.712,0	97.713.066,0	96.826.756,0
Salarios y gastos.....	5.378.811,0	4.909.832,0	5.477.530,0	5.448.424,0	5.152.997,5
Gastos de la Corte.....	889.700,0	802.880,0	737.850,0	769.852,0	724.350,0
Líquido para su Majestad.	87.652.463,0	89.163.885,0	89.861.332,0	91.494.790,0	90.949.408,5
Relaciones de ampliación.	22.679,0	40.468,0	12.701.921,0	17.224.889,0	19.736.819,0
Líquido resultante	87.675.142,0	89.204.353,0	102.563.253,0	108.719.679,0	110.686.227,5
<i>Extremadura</i>					
Valor por mayor.....	189.603.106,0	186.434.874,0	191.500.303,0	202.041.689,5	206.015.408,0
Salarios y gastos.....	11.730.380,0	11.887.681,0	13.616.475,5	19.190.317,0	18.813.821,0
Gastos de la Corte.....	1.493.202,0	1.416.214,0	1.337.570,0	1.318.398,0	1.456.720,0
Líquido para su Majestad.	176.379.524,0	173.130.979,0	176.546.257,5	181.532.974,5	185.744.867,0
Relaciones de ampliación.	3.324.200,0	6.333.846,0	5.110.453,0	2.973.218,0	858.554,0
Líquido resultante	179.703.724,0	179.464.825,0	181.656.710,5	184.506.192,5	186.603.421,0
<i>Galicia</i>					
Valor por mayor.....	232.482.015,0	235.519.697,0	247.743.337,0	270.482.594,0	309.024.234,2

<i>Rentas provinciales (mrs.)</i>	1768	1772	1776	1780	1784
Salarios y gastos.....	13.257.500,5	13.686.010,5	15.075.564,5	18.781.370,5	22.932.734,5
Gastos de la Corte.....	1.833.254,0	1.760.936,0	1.687.976,0	1.783.796,0	2.259.284,0
Líquido para su Majestad.	217.391.260,5	220.072.750,5	230.979.796,5	249.917.427,5	283.832.215,7
Relaciones de ampliación.	- 37.711,0	24.334,0	428.821,0	- 1.410.396,0	4.724,0
Líquido resultante	217.353.549,5	220.097.084,5	231.408.617,5	248.507.031,5	283.836.939,7

Granada

Valor por mayor.....	378.144.481,0	393.666.023,0	395.402.301,0	415.875.589,0	444.237.031,5
Salarios y gastos.....	45.531.457,0	45.222.295,0	44.058.493,0	46.868.256,0	48.834.602,0
Gastos de la Corte.....	2.757.130,0	2.690.607,0	2.563.241,0	2.549.531,0	3.304.792,5
Líquido para su Majestad.	329.855.894,0	345.753.121,0	348.780.567,0	366.457.802,0	392.097.637,0
Relaciones de ampliación.	4.259.519,0	4.435.794,0	3.032.248,0	14.182.209,0	708.157,0
Líquido resultante	334.115.413,0	350.188.915,0	351.812.815,0	380.640.011,0	392.805.794,0

Guadalajara

Valor por mayor.....	58.662.133,0	60.481.335,5	61.963.244,5	65.016.520,0	63.865.439,0
Salarios y gastos.....	3.885.526,0	3.838.896,5	4.381.811,5	7.209.233,0	5.545.330,0
Gastos de la Corte.....	457.370,0	446.744,0	411.510,0	396.380,0	459.112,0
Líquido para su Majestad.	54.319.236,0	56.195.695,0	57.169.923,0	57.410.907,0	57.860.997,0
Relaciones de ampliación.	939,0	0,0	80.115,0	57.470,0	150.001,0
Líquido resultante	54.320.176,0	56.195.695,0	57.250.038,0	57.468.377,0	58.010.998,0

Jaén

Valor por mayor.....	89.417.256,0	89.702.858,0	88.262.486,0	99.928.915,0	101.465.947,0
Salarios y gastos.....	12.047.654,0	12.087.715,0	12.093.356,0	12.285.901,0	13.639.816,0
Gastos de la Corte.....	—	730.180,0	568.600,0	562.306,0	687.146,0
Líquido para su Majestad.	77.009.469,0	76.884.963,0	75.600.530,0	87.080.708,0	87.138.985,0
Relaciones de ampliación.	13.726.007,0	14.369.018,0	14.607.754,0	1.783.661,0	6.051.279,0
Líquido resultante	90.735.476,0	91.253.981,0	90.208.284,0	88.864.369,0	93.190.264,0

León

Valor por mayor.....	108.230.569,0	108.540.664,0	108.362.241,0	108.388.382,0	109.784.102,0
Salarios y gastos.....	3.898.171,0	3.657.744,0	4.098.454,5	4.257.650,5	4.292.734,0
Gastos de la Corte.....	879.598,0	838.676,0	754.066,5	722.100,0	832.002,0
Líquido para su Majestad.	103.452.800,0	104.044.244,0	103.509.720,0	103.408.631,5	104.659.366,0
Relaciones de ampliación.	241.468,0	- 158.532,0	- 160.277,0	- 160.277,0	—
Líquido resultante	103.694.268,0	103.885.712,0	103.349.443,0	103.248.354,5	104.659.366,0

Madrid (casco)

Precio.....	193.162.183,0	193.162.183,0	194.162.183,0	194.162.183,0	194.264.183,0
-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Madrid y su provincia

Precio.....	65.260.670,0	65.260.670,0	65.260.670,0	65.260.670,0	65.260.670,0
-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Mancha

Valor por mayor.....	80.142.329,0	81.208.749,0	79.759.775,0	79.775.298,0	81.624.050,0
----------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

<i>Rentas provinciales (mrs.)</i>	1768	1772	1776	1780	1784
Salarios y gastos.....	8.349.304,0	7.806.360,0	7.679.742,5	8.150.740,5	8.675.695,5
Gastos de la Corte.....	602.334,0	596.638,0	574.884,0	524.808,0	—
Líquido resultante	71.190.691,0	72.805.751,0	71.505.148,5	71.099.749,5	72.665.449,5
<i>Murcia</i>					
Valor por mayor.....	128.103.824,0	160.591.438,0	169.773.070,5	165.431.917,0	186.124.962,0
Salarios y gastos.....	14.326.208,0	15.919.243,0	17.105.466,5	19.098.231,0	16.262.114,0
Gastos de la Corte.....	1.080.521,0	1.008.482,0	1.056.690,0	1.049.666,0	1.050.136,0
Líquido para su Majestad.	112.697.095,0	143.663.713,0	151.610.914,0	145.284.020,0	168.812.712,0
Relaciones de ampliación .	10.969.569,0	2.352.271,0	7.663.517,0	7.970.482,0	540.019,0
Líquido resultante	123.666.664,0	146.015.984,0	159.274.431,0	153.254.502,0	169.352.731,0
<i>Palencia</i>					
Valor por mayor.....	61.439.601,5	62.995.311,0	66.065.453,5	58.508.703,0	61.346.253,0
Salarios y gastos.....	4.563.929,0	5.214.922,0	5.502.267,0	4.905.086,0	4.700.334,5
Gastos de la Corte.....	471.474,0	464.946,0	453.612,0	381.254,0	451.602,0
Relaciones de ampliación .	—	—	—	143.740,0	—
Líquido resultante	56.404.198,5	57.315.443,0	60.109.574,5	53.366.103,0	56.194.316,5
<i>Salamanca</i>					
Valor por mayor.....	90.698.553,0	90.192.750,0	90.925.981,0	91.001.389,0	90.013.957,0
Bajas, salarios y gastos.....	5.462.433,0	5.216.440,0	5.563.082,0	5.960.373,0	6.555.926,0
Gastos de la Corte.....	651.240,5	686.088,0	654.784,0	641.592,0	667.258,0
Refacción al estado eclesiástico (millones).....	—	22.500,0	163.812,0	165.402,0	—
Líquido para su Majestad.	84.584.879,5	84.267.722,0	84.544.303,0	84.234.022,0	82.790.773,0
Relaciones de ampliación .	—	—	77.563,0	80.274,0	3.857.360,0
Líquido resultante	84.584.879,5	84.267.722,0	84.621.866,0	84.314.296,0	86.648.133,0
<i>Segovia</i>					
Valor por mayor.....	95.741.431,0	100.446.312,0	98.866.609,5	94.322.316,0	93.354.552,0
Salarios y gastos.....	6.669.776,0	7.954.423,0	7.856.716,0	7.953.351,0	7.342.959,0
Gastos de la Corte.....	794.666,0	746.486,0	689.122,0	582.400,0	667.236,0
Líquido para su Majestad.	88.276.989,0	91.745.403,0	90.320.771,5	85.786.566,0	85.344.357,0
Relaciones de ampliación .	5.978.623,0	1.747.881,0	7.076.670,0	—	2.935.897,5
Líquido resultante	94.255.612,0	93.493.284,0	97.397.441,5	85.786.566,0	88.280.254,5
<i>Sevilla</i>					
Valor por mayor.....	638.944.534,0	637.293.426,0	693.685.962,5	679.735.214,5	816.942.535,0
Salarios y gastos.....	64.090.746,0	67.425.143,0	68.233.394,5	76.930.064,5	81.139.782,0
Gastos de la Corte.....	4.967.156,0	4.537.670,0	4.375.814,0	4.989.208,0	5.694.448,0
Líquido para su Majestad.	569.886.632,0	565.330.613,0	621.076.754,0	597.815.942,0	730.108.305,0
Relaciones de ampliación .	88.528,0	—23.797,0	340.533,0	72.103.631,0	—1.127.026,0
Líquido resultante	569.975.160,0	565.306.816,0	621.417.287,0	669.919.573,0	728.981.279,0
<i>Soria</i>					
Valor por mayor.....	40.024.064,0	39.969.398,0	40.038.245,0	40.060.401,0	40.875.820,0

<i>Rentas provinciales (mrs.)</i>	1768	1772	1776	1780	1784
Salarios y gastos.....	1.028.500,0	1.028.500,0	1.028.500,0	870.752,0	1.111.800,0
Gastos de la Corte.....	545.056,0	308.360,0	281.700,0	283.768,0	310.052,0
Líquido para su Majestad.	38.450.508,0	38.632.538,0	38.728.045,0	38.905.881,0	39.453.968,0
Relaciones de ampliación.	—	—	—	239.244,0	609,0
Líquido resultante	38.450.508,0	38.632.538,0	38.728.045,0	39.145.125,0	39.454.577,0
<i>Toledo</i>					
Valor por mayor.....	212.592.416,0	214.169.896,0	218.646.021,0	216.165.778,0	223.797.000,0
Salarios y gastos.....	18.732.245,0	19.220.980,0	19.373.531,0	19.905.504,0	19.849.799,0
Gastos de la Corte.....	1.661.160,0	1.566.486,0	1.466.342,0	1.426.654,0	1.587.688,0
Líquido resultante	192.199.011,0	193.382.430,0	197.806.148,0	194.833.620,0	202.359.513,0
<i>Toro</i>					
Valor por mayor.....	46.125.927,0	46.303.068,0	46.087.976,0	46.777.409,0	47.303.001,0
Salarios y gastos.....	2.718.107,5	3.108.376,0	3.575.310,0	3.225.471,0	3.185.512,0
Gastos de la Corte.....	362.780,0	369.108,0	313.892,0	302.804,0	353.204,0
Líquido para su Majestad.	43.045.039,5	42.825.584,0	42.198.774,0	43.249.134,0	43.764.285,0
Relaciones de ampliación.	401.488,0	370.943,0	464.640,0	—	—
Líquido resultante	43.446.527,5	43.196.527,0	42.663.414,0	43.249.134,0	43.764.285,0
<i>Valladolid</i>					
Valor por mayor.....	129.273.100,0	127.225.443,0	133.157.210,5	128.786.444,5	132.503.360,0
Salarios y gastos.....	6.711.499,0	6.311.886,0	8.847.086,5	9.454.785,0	9.411.548,0
Gastos de la Corte.....	985.166,0	967.516,0	896.222,0	842.588,0	934.212,0
Líquido resultante	121.576.435,0	119.946.041,0	123.413.902,0	118.489.071,5	122.157.600,0
<i>Zamora</i>					
Valor por mayor.....	28.324.277,0	28.323.621,0	28.324.517,0	28.326.513,0	28.797.541,0
Salarios y gastos.....	678.980,0	744.051,0	772.450,5	936.700,0	1.102.574,0
Gastos de la Corte.....	227.760,0	222.338,0	202.516,0	191.868,0	218.568,0
Líquido resultante	27.417.537,0	27.357.232,0	27.349.550,5	27.197.945,0	27.476.399,0

NOTAS:

— Salarios, gastos y bajas rentas provinciales Burgos: incluye bajas del servicio ordinario.
 — Valor por mayor rentas provinciales Granada: incluye la renta de la población y la renta del azúcar (millón), con relaciones separadas de las de rentas reales y millones. Se han sumado y restado relaciones de ampliación positivas y negativas de esta renta.

— Valor por mayor de Guadalajara: incluye relaciones de ampliación de rentas reales y millones.

— Madrid (casco): rentas reales y velas de sebo.

— Madrid y su provincia: millones.

— Murcia: incluye la renta de la sosa y la barrilla.

FUENTE: Ver nota 21.

CUADRO 2
Totales de rentas provinciales en las 22 provincias

	1768	1772	1776	1780	1784
Valor por mayor rentas reales	1.976.957.762,0	2.019.824.842,0	2.094.880.929,0	2.128.299.946,0	2.223.745.358,0
Valor por mayor millones.....	1.358.467.646,0	1.376.875.171,0	1.400.137.137,0	1.407.736.667,0	1.558.444.981,0
Valor por mayor rentas provinciales.....	3.335.425.408,0	3.396.700.012,0	3.495.018.066,0	3.536.036.612,0	3.782.190.339,0
Bajas rentas reales.....	7.804.052,0	8.605.432,5	7.740.030,5	2.461.094,5	1.898.698,0
Refacción, bajas y moderaciones millones.....	450.626,0	473.126,0	1.133.735,0	1.372.963,5	686.766,0
Total bajas rentas provinciales.....	8.254.678,0	9.078.558,5	8.873.765,5	3.834.058,0	2.585.464,0
Relaciones de ampliación rentas reales.....	68.653,0	31.983,0	3.384,0	—	45.335,0
Relaciones de ampliación millones.....	—	—	2.976,0	—	—
Relaciones de ampliación negativas rentas reales.....	—	—	11.114,0	19.925,0	—
Relaciones de ampliación negativas rentas provinciales.....	—	—	11.114,0	19.925,0	—
Total relaciones de ampliación rentas provinciales...	68.653,0	31.983,0	- 4.754,0	- 19.925,0	45.335,0
Valor por mayor rentas provinciales (con bajas y ampliaciones).....	3.327.239.383,0	3.387.653.437,0	3.486.139.546,0	3.532.182.629,0	377.965.021,0
Salarios y gastos de admón. rentas reales.....	125.137.401,0	129.750.876,0	132.778.450,5	154.981.801,0	155.641.857,5
Salarios y gastos de admón. millones.....	123.398.387,0	124.720.880,5	130.594.329,0	143.317.124,5	148.621.909,0
Salarios y gastos de administración rentas provinciales.....	248.535.788,0	254.471.756,5	263.372.779,5	298.298.925,5	304.263.766,5
Mitad de la Corte rentas reales	11.885.580,5	11.504.559,0	10.861.373,0	10.957.380,0	12.778.377,5
Mitad de la Corte millones.....	12.037.808,0	11.520.934,0	10.872.532,0	10.976.707,0	12.271.222,0
Gastos de la Corte rentas provinciales.....	23.923.388,5	23.025.493,0	21.733.905,0	21.934.087,0	25.049.599,5
Líquido para su Majestad rentas reales.....	1.832.198.881,0	1.869.995.957,0	1.943.493.345,0	1.959.879.745,0	2.053.471.760,0
Líquido para su Majestad millones.....	1.222.580.825,0	1.240.160.230,0	1.257.539.517,0	1.252.069.872,0	1.396.865.084,0
Líquido para su Majestad rentas provinciales.....	3.054.779.706,0	3.110.156.187,0	3.201.032.862,0	3.211.949.617,0	3.450.336.844,0
Aumento por el importe de los valores secuestrados (rentas reales)	481.229,0	500.368,0	433.670,0	436.222,0	—
Relaciones de ampliación rentas reales.....	56.282.340,0	44.754.480,0	52.789.791,0	114.903.052,0	49.531.925,5

	1768	1772	1776	1780	1784
Relaciones de ampliación millones	2.719.583,0	2.159.895,5	862.468,0	2.240.970,0	1.000.485,0
Relaciones de ampliación negativas rentas reales	99.936,0	106.061,0	101.681,0	1.512.077,0	—
Relaciones de ampliación negativas millones	417.186,0	1.179.774,0	260.073,0	588.385,0	1.864.761,0
Total relaciones de ampliación rentas provinciales ...	58.966.030,0	46.128.908,5	53.724.175,0	115.479.782,0	48.667.649,5
Líquido rentas reales	1.888.863.014,0	1.915.144.744,0	1.996.615.125,0	2.073.706.942,0	2.103.003.686,0
Líquido millones	1.224.883.222,0	1.241.140.352,0	1.258.141.912,0	1.253.722.457,0	1.396.000.808,0
Líquido rentas provinciales..	3.113.746.236,0	3.156.285.096,0	3.254.757.037,0	3.327.429.399,0	3.499.004.494,0

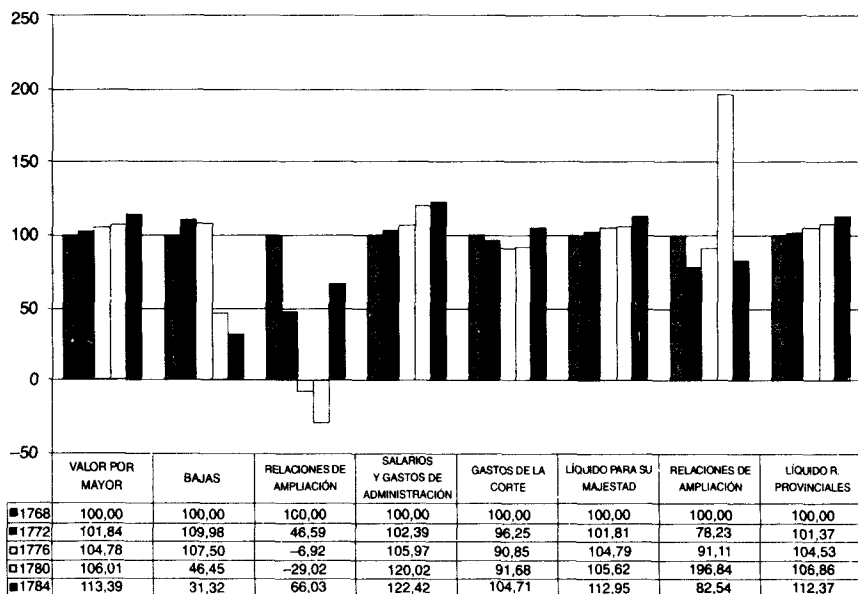
NOTAS:

— Mitad de la Corte rentas reales: en las rentas de la sosa y de la barrilla y de la población son gastos de la Corte.

— Mitad de la Corte millones: en la renta del azúcar son gastos de la Corte.

FUENTE: Ver nota 21.

GRÁFICO 1

Números índice totales rentas provinciales en las 22 provincias

FUENTE: Ver nota núm. 21.

en cuenta los totales de las veintidós provincias, se observa en el gráfico 1 un aumento moderado de los primeros, más acusado en 1780 y 1784, y una tendencia a la disminución de los segundos, salvo en el último año citado, en que sucede lo contrario²⁴. Los gastos citados no eran excesivamente elevados en las provincias, ni lo fueron en su conjunto (cuadros 1 y 2). Los salarios y gastos de administración supusieron en los años estudiados porcentajes medios de los valores por mayor que oscilaron entre el 2,52 por 100 de Soria y el 13,28 por 100 de Jaén²⁵, lo que es, por otra parte, muestra de las disparidades que se dieron entre las provincias. En algunas, hay también diferencias destacables en los porcentajes de cada año con respecto a los medios²⁶. Mucho más reducidos fueron los gastos de la corte, cuyos porcentajes medios, con relación a los valores brutos, variaron entre el 0,86 de Soria y el 0,54 de Jaén²⁷. Sumando ambos tipos de gasto, oscilaron entre el 3,38 de la primera provincia citada y el 13,82

²⁴ Los salarios y gastos de administración se incrementaron un 22 por 100 hasta 1784, aunque este aumento no fue grande en los primeros años estudiados (1772 y 1776). En el cuadro 2 se observa que crecieron más los salarios y gastos de administración de rentas reales (24 por 100) que los de millones (20 por 100). Los gastos de la corte no se elevaron mucho (5 por 100), especialmente los de millones (sólo 2 por 100), hasta 1784. En este año, aumentaron bastante más los de rentas reales (7,5 por 100) que los de millones.

²⁵ Soria un 2,52 por 100, Ávila un 2,69 por 100, Zamora un 2,98 por 100, León un 3,72 por 100, Burgos un 4,23 por 100 (en este porcentaje se incluyen bajas), Cuenca un 5,50 por 100, Valladolid un 6,25 por 100, Salamanca un 6,35 por 100 (también incluye bajas), Galicia un 6,39 por 100, Toro un 6,80 por 100, Extremadura un 7,66 por 100, Segovia un 7,83 por 100, Guadalajara un 7,96 por 100, Palencia un 8,02 por 100, Toledo un 8,94 por 100, Mancha un 10,10 por 100, Murcia un 10,29 por 100, Sevilla un 10,34 por 100, Granada un 11,39 por 100, Córdoba un 12,08 por 100 (también se incluyen bajas y moderaciones) y Jaén un 13,28 por 100.

²⁶ En Ávila los salarios y gastos de administración supusieron porcentajes con respecto al valor por mayor cercanos a 1,5 en 1768, 1772 y 1776 y, en cambio, en 1780 y 1784 rondaron el 4,5; en Extremadura los porcentajes de los tres primeros años citados, 6,19, 6,38 y 7,11 se ven compensados con los de 1780 y 1784 (9,50 y 9,13), al igual que ocurre en Guadalajara especialmente con 1780 (cuyos porcentajes en los años estudiados son 6,62, 6,35, 7,07, 11,09 y 8,68). Menores diferencias se producen en Valladolid (5,19, 4,96, 6,64, 7,34 y 7,10).

²⁷ 0,86 por 100 en Soria; 0,82 por 100 en Cuenca; 0,76 por 100 en Ávila; 0,75 por 100 en Burgos y en Zamora; 0,74 por 100 en Córdoba y en León; 0,73 por 100 en Salamanca y en Toro; 0,72 por 100 en Extremadura, en Galicia, en Palencia y en Segovia; 0,71 por 100 en Sevilla, en Toledo y en Valladolid; 0,70 por 100 en Guadalajara; 0,68 por 100 en Granada; 0,66 por 100 en Murcia; 0,57 por 100 en Mancha (esta provincia no tiene gastos de la corte en 1784), y 0,54 por 100 en Jaén (en esta provincia no figuran gastos de la corte en 1768). Sólo superaron el 1 por 100 en un año, 1768, en la provincia de Soria (1,36 por 100).

de la otra ²⁸. Además, la participación media de ambos tipos de gasto en el valor por mayor en el período estudiado, teniendo en cuenta todas las provincias, fue inferior al 8,5 por 100 (los primeros 7,79 y los segundos 0,66) ²⁹. Por ello me parece injusta la crítica que se ha hecho a estos impuestos de que su administración era muy costosa. Así, respondiendo a la cuestión relativa al coste de la administración de estas rentas, los resultados obtenidos muestran una organización de la hacienda con unos gastos de gestión no muy elevados. La explicación de este hecho quizá haya que buscarla en que sólo se administraban por empleados de la real hacienda estas rentas en las ciudades y villas más importantes, mientras que en el resto se recaudaban por encabezamiento. La verificación de esta hipótesis se podrá hacer mediante el estudio comparativo basado en los datos por menorizados de las distintas provincias.

Las ampliaciones totales contabilizadas en relación aparte variaron de forma bastante errática, siendo de destacar el aumento de 1780 (gráfico 1), pero no fueron muy importantes porque su peso con respecto al valor por mayor de las rentas provinciales no llegó al 2 por 100 (cuadro 2). En este cuadro también se observa la todavía más escasa importancia de las ampliaciones y bajas recogidas tras los valores por mayor, por lo no se ha estudiado su distribución por provincias. Las primeras, en cambio, fueron relevantes en determinados años en algunas provincias, Córdoba, Cuenca, Jaén y Sevilla, lo que hizo que su participación media fuese de las más elevadas. Además, los porcentajes medios de Murcia y de Segovia fueron superiores al de Sevilla, por ser sus relaciones de ampliación relativamente altas en casi todos los años (cuadro 1) ³⁰.

²⁸ A Jaén le siguieron en importancia Córdoba (12,82); Granada (12,07); Sevilla (11,05); Murcia (10,95); Mancha (10,67). Las provincias con menores porcentajes fueron Soria (3,38); Ávila (3,45); Zamora (3,73); León (4,46), y Burgos (4,98).

²⁹ En el caso de las rentas generales o de aduanas, estos gastos supusieron en el período 1738-1788 un porcentaje del 11,3, como se desprende de los datos proporcionados por Tomás García-Cuenca (1988), t. II, p. 509.

³⁰ En Córdoba, la participación de éstas en el valor por mayor fue del 12,12 por 100 en 1768, del 10,56 en 1772, mientras que en los otros años no llegó al 0,5 por 100; en Cuenca del 13,22 en 1776, del 17,63 en 1780 y del 20,38 en 1784, no superando el 0,05 los anteriores; en Jaén del 15,35 en 1768, del 16,02 en 1772 y del 16,55 en 1776 (en 1780 fue sólo del 1,78 por 100 y en 1784 del 5,96); en Sevilla del 10,61 por 100 en 1780 y en los demás años no superó el 0,14 por 100. Fue relativamente importante en algunos casos: en Burgos en 1768 (1,37); en Extremadura en 1768 (1,75), 1772 (3,40), 1776 (2,67) y 1780 (1,47); en Granada en 1768 y 1772 (1,13) así como en 1780 (3,41); en Murcia en 1768 (8,56), 1772 (1,46), 1776 (4,51) y 1780 (4,82), y en Segovia en 1768 (6,24), 1772 (1,74), 1776 (7,16) y 1784 (3,14). El promedio de estos porcentajes en los años estudiados fue superior al 1 por 100 en Córdoba (4,54); Cuenca (10,26); Extremadura

El valor por mayor de las rentas provinciales venía explicado en un 60 por 100 por las rentas reales y en un 40 por 100 por los millones (cuadro 2). En cambio, los salarios y gastos de administración y los gastos de la corte de rentas reales y de millones se repartían de forma muy parecida, aunque ello era el resultado lógico de que la mayor parte de los salarios y gastos de administración de las rentas provinciales se dividían entre rentas reales y millones y de que los gastos de la corte se repartían por igual entre ambas clases de rentas, salvo en las rentas particulares de una provincia que fueran de uno, y no del otro, tipo de derecho ³¹. Las relaciones de ampliación eran más importantes en las rentas reales que en los millones, en los que su participación media en los ingresos brutos no llegó al 0,05 por 100 ³².

En el cuadro 3 figuran los porcentajes de participación de los líquidos finales de las distintas provincias en el líquido total. De él se desprende que entre 1768 y 1784 Sevilla (19 por 100), Granada (11 por 100), Madrid (8 por 100), Galicia (7 por 100) y Toledo (6 por 100) fueron las que tuvieron una mayor aportación media a las rentas provinciales, y las menores fueron las de Zamora (0,84 por 100), Soria (1,19 por 100), Toro (1,33 por 100), Guadalajara (1,73 por 100), Palencia (1,74 por 100) y Ávila (1,92 por 100). También se concluye que, en el período estudiado, cinco provincias tienden a aumentar su participación en los totales líquidos, Cuenca, Galicia, Granada, Murcia y Sevilla, mientras que la del resto se mantiene o disminuye.

Es de destacar la tendencia a la estabilidad en las recaudaciones brutas (valor por mayor) y netas (líquidos «resultantes») de la mayor parte de las provincias entre 1768 y 1780 que se observa en el cuadro 1. Sólo son superiores al 10 por 100 los aumentos de ambas en Murcia, Galicia

(1,94); Granada (1,32); Jaén (11,63); Murcia (3,93); Segovia (3,66), y Sevilla (2,11). Es de señalar también la escasa importancia que tienen las relaciones de ampliación de millones.

³¹ Las recogidas en la nota 17. Las participaciones porcentuales medias de los salarios y gastos de administración de rentas reales y millones en los valores por mayor de rentas provinciales eran cercanas al 4 por 100 y las de los gastos de la corte del 0,33.

³² El porcentaje medio de participación de las relaciones de ampliación positivas de rentas reales en las rentas provinciales fue de 1,82 y el de millones 0,05; el de las relaciones de ampliación negativas de rentas reales 0,01 y el de millones 0,02, siendo el del total de las relaciones de ampliación positivas y negativas de rentas provinciales de 1,84. También fueron más significativas en las rentas reales que en los millones las relaciones de ampliación y bajas contabilizadas antes de los salarios y gastos de administración.

CUADRO 3

Participación de las provincias en los líquidos de rentas provinciales

<i>Participación en los líquidos</i>	% 1768 <i>s/total</i>	% 1772 <i>s/total</i>	% 1776 <i>s/total</i>	% 1780 <i>s/total</i>	% 1784 <i>s/total</i>	% <i>medio</i>
Ávila.....	1,99	1,96	1,91	1,91	1,85	1,92
Burgos.....	4,94	4,87	4,68	4,55	4,30	4,67
Córdoba.....	4,79	4,75	4,21	4,22	4,05	4,41
Cuenca.....	2,82	2,83	3,15	3,27	3,16	3,04
Extremadura.....	5,77	5,69	5,58	5,55	5,33	5,58
Galicia.....	6,98	6,97	7,11	7,47	8,11	7,33
Granada.....	10,73	11,09	10,81	11,44	11,23	11,06
Guadalajara.....	1,74	1,78	1,76	1,73	1,66	1,73
Jaén.....	2,91	2,89	2,77	2,67	2,66	2,78
León.....	3,33	3,29	3,18	3,10	2,99	3,18
Madrid.....	8,30	8,19	7,97	7,80	7,42	7,93
Mancha.....	2,29	2,31	2,20	2,14	2,08	2,20
Murcia.....	3,97	4,63	4,89	4,61	4,84	4,59
Palencia.....	1,81	1,82	1,85	1,60	1,61	1,74
Salamanca.....	2,72	2,67	2,60	2,53	2,48	2,60
Segovia.....	3,03	2,96	2,99	2,58	2,52	2,82
Sevilla.....	18,31	17,91	19,09	20,13	20,83	19,26
Soria.....	1,23	1,22	1,19	1,18	1,13	1,19
Toledo.....	6,17	6,13	6,08	5,86	5,78	6,00
Toro.....	1,40	1,37	1,31	1,30	1,25	1,33
Valladolid.....	3,90	3,80	3,79	3,56	3,49	3,71
Zamora.....	0,88	0,87	0,84	0,82	0,79	0,84

FUENTE: Ver nota 21.

y Granada, los de los valores líquidos de Cuenca³³ y Sevilla³⁴ y los del valor por mayor de Jaén³⁵ y Guadalajara³⁶. En 1784, se produce, en gene-

³³ En Cuenca, aunque el valor por mayor sólo se incrementa en un 4 por 100, el líquido lo hace en un 24, en lo que influyen indudablemente las relaciones de ampliación, en las que tiene un peso importante la venta del producto de las tercias reales en especie.

³⁴ Su valor por mayor aumenta un 6 por 100 y el líquido el 18 por 100, como consecuencia de la elevada relación de ampliación.

³⁵ En Jaén el valor por mayor es en 1780 superior al de 1768 en un 12 por 100, pero el líquido es inferior en un 2 por 100 y el resto de los años ambas magnitudes rondan el índice de partida (1768 = 100).

³⁶ En Guadalajara, el valor por mayor aumenta en un 11 por 100, pero el líquido lo hace en un 6 por 100.

ral, un pequeño incremento (y en pocos casos disminución) de las recaudaciones, con la excepción de Sevilla, cuyo valor por mayor aumenta un 20 por 100 y el líquido un 9 por 100 con respecto a 1780. Teniendo en cuenta el conjunto de las veintidós provincias, el crecimiento de los ingresos brutos procedentes de las rentas provinciales entre 1768 y 1780 fue sólo del 6 por 100, y entre el primer año citado y 1784 del 13 por 100 (gráfico 1). Las netas tampoco aumentaron mucho hasta 1780 (5 por 100 los «líquidos para su majestad» y 7 por 100 los resultantes), aunque el crecimiento fue mayor en 1784 (respectivamente 7 y 5 por 100 con relación a 1780 y 13 y 12 por 100 desde 1768). Estos porcentajes no me parecen muy elevados, especialmente si se tiene en cuenta que en 1784, se contabilizan en las relaciones de rentas reales y millones más derechos que en los anteriores, sobre todo en Sevilla ³⁷, aunque habría que valorar su efecto real sobre las recaudaciones, estudiando de forma pormenorizada las relaciones generales de valores. Por otra parte, las recaudaciones brutas y netas de las rentas reales crecieron más que las de millones hasta 1780, y lo contrario sucedió en 1784 (cuadro 2) ³⁸.

Además, cuando se estudian las recaudaciones líquidas totales en términos reales (gráfico 2) ³⁹, se observa una clara tendencia a la baja de éstas. Salvo en 1776, los precios crecieron más de lo que lo hicieron las recaudaciones, a pesar de que, como se ha explicado, en 1784 se con-

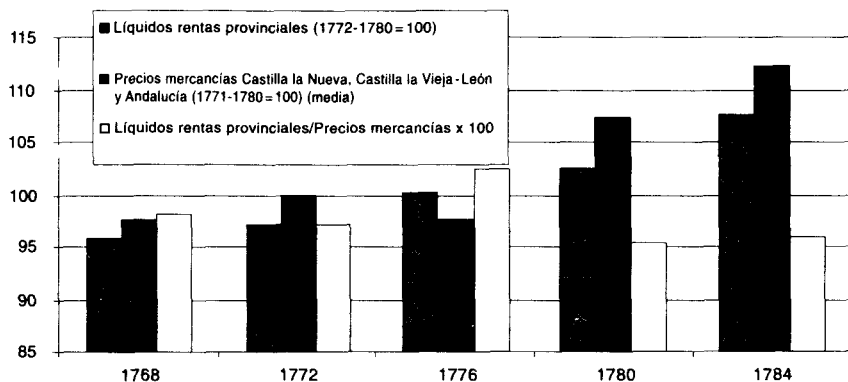
³⁷ A partir de la Real Resolución de 30 de octubre de 1781 (citada en la nota 1), que dispone que sólo haya una cuenta en que con distinción se comprendan todos los ramos agregados a las rentas provinciales, pasan a contabilizarse en las relaciones de rentas reales la cuota del aguardiente y el quinto de la nieve y en las de millones el millón de la nieve, además de otros derechos que se han citado cuyas relaciones generales de valores figuraban junto a las de rentas reales y millones (ver nota 17), y de otras rentas particulares de determinadas provincias, que en el caso de Sevilla son el diezmo del aceite del aljarafe y ribera de Sevilla y la extracción y regalía de ésta, en cuanto a las relaciones de rentas reales, y el cargado y millón de Sevilla, en las de millones. Ver nota 1.

³⁸ El valor por mayor de rentas reales creció hasta 1780 un 8 por 100 y el de millones un 4 por 100 y hasta 1784 un 15 y un 14 por 100, respectivamente. Los «líquidos para su majestad» de rentas reales se incrementaron entre 1768 y el primer año citado un 7 por 100 y los de millones un 2 por 100. Los «líquidos resultantes» un 10 y un 2 por 100. En 1784 los «líquidos para su majestad» de rentas reales aumentaron con respecto a 1780 un 5 por 100 y, comparándolos con los de 1768, un 12 por 100, y los de millones, respectivamente, un 11,5 y un 14 por 100. Los líquidos «finales» de rentas reales un 1,5 por 100 con respecto a 1780 y un 12 por 100 con relación a 1768, mientras que los millones lo hicieron en un 11 y un 14 por 100.

³⁹ En el gráfico 2 se recoge en números índice la evolución de los líquidos «resultantes» de rentas provinciales, de los precios de las mercancías y del cociente de los primeros entre los segundos. Los índices de precios se han tomado de Hamilton, promediando los de Castilla la Nueva, Castilla la Vieja-León y Andalucía [Earl J. Hamilton (1988), p. 190]. Como este autor utiliza como base el período 1771-1780, en la elaboración de los índices

GRÁFICO 2

*Números índice líquidos rentas provinciales, precios mercancías Hamilton
y líquidos rentas provinciales/precios mercancías*



FUENTE: Ver notas 21 y 39 y E. J. Hamilton (1988), p. 190.

tabilizan más derechos. Como muchas de estas rentas se cobraban mediante el sistema de recaudación directa en las ciudades y villas más importantes y por encabezamiento en las demás (aunque hubo pueblos que pasaron de encabezarse a administrarse directamente, y al revés), y como las cantidades que se debían abonar por otras, como el servicio ordinario y extraordinario o el fiel medidor, se mantuvieron constantes, cuando crecían los precios, en los casos en los que se mantenía la recaudación sin modificaciones, la contribución en términos reales disminuía, lo que no tenía por qué ocurrir en las administradas⁴⁰. En los años, como el de 1776, en que los precios eran menores, la recaudación real en los pueblos encabezados era mayor y en las ciudades administradas se ajustaba mejor a los movimientos de los precios. Pero como la tendencia en el período estudiado es al crecimiento de los precios, las recaudaciones reales tendieron a disminuir, como se observa en el gráfico citado. Esta conclusión permite reflexionar sobre el segundo, y más importante, de los objetivos

de precios de los valores líquidos de rentas provinciales he empleado, para que la comparación sea más homogénea, como base 1772-1780.

⁴⁰ De todas formas, en éstas una parte de las rentas provinciales se recaudaban por ajuste o convenio con agricultores, gremios o mercaderes, que tampoco solían ser flexibles, al menos a corto plazo, a los incrementos de los precios.

de este artículo, que es la influencia supuestamente negativa que las rentas provinciales tuvieron en el crecimiento económico de la corona de Castilla, en un período en el que los datos disponibles reflejan el aumento de la producción por encima del de la población. Para ahondar en esta cuestión sería preciso estudiar la composición, en cada provincia, de este impuesto, además de tener en cuenta la evolución de los precios, la población y la renta de cada una de ellas.

BIBLIOGRAFÍA

- ANES ÁLVAREZ, Gonzalo (1974): «La contribución de frutos civiles entre los Proyectos de reforma tributaria en la España del siglo XVIII», *Hacienda Pública Española*, núm. 27, pp. 21-45.
- (1990): «La reforma de la Hacienda durante el reinado de Carlos III», *Hacienda Pública Española*, núm. 2, pp. 7-12.
- ANGULO, M. Carmen (2000): *Las rentas provinciales en la hacienda de España en el siglo XVIII. El reino de Toledo*, tesis doctoral dirigida por el prof. Dr. D. Gonzalo Anes, leída en junio, Departamento de Historia e Instituciones Económicas I, Facultad de CC. Económicas y Empresariales, Universidad Complutense de Madrid.
- ARTOLA, Miguel (1982): *La Hacienda del Antiguo Régimen*, Madrid, Alianza Editorial/Banco de España.
- ARTOLA, Miguel, y MARTÍN NINO, Jesús (1988): «La Hacienda», en Miguel ARTOLA (dir.), *Enciclopedia de Historia de España. II. Instituciones Políticas, Imperio*, Madrid, Alianza Editorial, pp. 165-237.
- CAAMAÑO Y PARDO, Juan José (1798): *Substitución a las rentas provinciales con la única y universal contribución*, Madrid, Imprenta Sancha.
- CALLE SAÍZ, Ricardo (1978): *La hacienda pública en España. Un análisis de la literatura financiera*, Madrid, Fundación Universitaria San Pablo (CEU).
- CAMARERO BULLÓN, Concepción (1993): «El debate de la única contribución: Catastrar las Castillas 1749», en *Alcabala del viento. Letra D*, editada por la autora citada, Madrid, Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria.
- CANGA ARGÜELLES, José (1968): *Diccionario de Hacienda para el uso de los encargados de la suprema dirección de ella, por...*, t. IAB, imprenta española de M. Calero, London, 1826-1827, cinco volúmenes. La segunda edición se tituló *Diccionario de Hacienda con aplicación a España, por don...*, *Ministro jubilado del Consejo Real y Supremo de Indias*, imprenta de don Marcelino Calero y Portocarrero, Madrid, 1833-1834, dos tomos. La edición que utilizo en este artículo es una facsímil de 1968 realizada en Madrid por el Instituto de Estudios Fiscales.
- CARANDE, Ramón (1945): «Las llevaderas alcabalas», *Moneda y Crédito*, núm. 13, junio, pp. 15-36.
- CUENCA ESTEBAN, Javier (1981): «Ingresos netos del Estado español (1788-1820)», *Hacienda Pública Española*, núm. 69, pp. 183-208.

- DONÉZAR DÍEZ DE ULZURRUN, José María (1984): *Riqueza y propiedad en la Castilla del Antiguo Régimen*, Madrid, Instituto de Estudios Agrarios, Pesqueros y Alimentarios.
- (1989): «El Catastro de Ensenada y su proceso de formación (1750-1760)», *Revista de la Facultad de Geografía e Historia*, núm. 4, pp. 207-224.
- (1995): «Frente a la única contribución, el triunfo de la contribución indirecta», en José María DONÉZAR y Manuel PÉREZ DE LEDESMA (eds.), *Antiguo Régimen y liberalismo. Homenaje a Miguel Artola. 2. Economía y Sociedad*, Madrid, Alianza Editorial, pp. 123-133.
- ENSENADA, marqués de la: «Representación hecha al Sr. D. Fernando VI por su ministro el..., proponiendo medios para el adelantamiento de la Monarquía y buen gobierno de ella (1751)», en Antonio VALLADARES DE SOTOMAYOR (1788), t. XII, pp. 260-283.
- FERNÁNDEZ ALBALADEJO, Pablo (1977): «El decreto de suspensión de pagos de 1739: análisis e implicaciones», *Moneda y Crédito*, núm. 142, pp. 51-85.
- FONTANA, Joseph (1971): «La supervivencia del mito de la única contribución», *Hacienda Pública Española*, núm. 17, pp. 111-119.
- (1973): *Hacienda y Estado, 1823-1833*, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid.
- (1976): selección de documentos de José López Juana Pinilla: «La representación sobre los medios de organizar un sistema de hacienda» (1816); «Exposición que el Intendente de Guadalajara..., dirige al augusto congreso nacional, manifestando la necesidad de establecer sobre bases sólidas el sistema general de hacienda pública» (1814); «Proyecto de real hacienda que decida al rey nuestro Sr. ..., el Intendente de Guadalajara...» (1814); y «Situación de la hacienda pública en España en marzo de 1822» (1822), *Hacienda Pública Española*, núm. 38, pp. 271-314..
- FUENTES QUINTANA, Enrique (1964): «El impuesto sobre el volumen de ventas: perspectivas de una idea fiscal española», *Anales de economía*, 2.^a época, núm. 5, pp. 3-160.
- (dir.) (1999a): *Economía y economistas españoles. 2. De los orígenes al mercantilismo*, Madrid, Fundación de las Cajas de Ahorros Confederadas para la Investigación Económica y Social, Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores.
- (dir.) (1999b): *Economía y economistas españoles. 3. La ilustración*, Madrid, Fundación de las Cajas de Ahorros Confederadas para la Investigación Económica y Social, Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores.
- GALLARD, Diego María (1787): «Ventajas políticas de España por los nuevos reglamentos de rentas provinciales, tanto en la menor, más uniforme y equitativa contribución del vasallo, como por el fomento que resulta a la agricultura, al comercio y a las artes: Memoria premiada por la Real Sociedad Económica de Segovia y escrita por el Licenciado..., individuo de la Real Academia de Derecho Nacional y Público de Santa Bárbara», en *Actas y Memorias de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de la provincia de Segovia*, Segovia, en la imprenta de Don Antonio Espinosa, t. III, pp. 81-363.
- GALLARDO FERNÁNDEZ, Francisco (1805-1808): *Origen, progresos y estado de las rentas de la corona de España, su gobierno y administración, por..., Oficial de la Secretaría de Estado y del despacho universal de Hacienda de España, del Consejo de S.M.*,

- su Secretario con ejercicio de decretos*, Madrid, en la Imprenta Real, t. I, 1805; t. II, 1805; t. III, 1805; tt. IV y V, 1806; tt. VI y VII, 1808.
- GARCÍA-CUENCA ARIATI, Tomás (1988): *Las rentas generales o de aduanas, 1740-1788*, tesis doctoral sin publicar presentada en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid.
- (1990): «Algunas consideraciones sobre la tributación en el reinado de Carlos III», *Hacienda Pública Española*, monografía núm. 2, pp. 27-34.
- (1991): «El sistema impositivo y la rentas generales o de aduanas en España en el siglo XVIII», *Hacienda Pública Española*, monografía núm. 1, pp. 59-74.
- GARCÍA-LOMBARDERO, Jaime (1978): «Algunos problemas de la administración y cobranzas de las rentas provinciales en la primera mitad del siglo XVIII», en Alfonso OTAZU (ed.), *Dinero y Crédito. (Siglos XV al XIX)*, Madrid, Moneda y Crédito, pp. 63-87.
- HAMILTON, Earl J. (1988): *Guerra y precios en España, 1651-1800*, Madrid, Alianza Universidad. La edición original, *War and Prices in Spain, 1651-1800*, Harvard University Press, 1947.
- HERNÁNDEZ ANDREU, Juan (1971): «La única contribución del Marqués de la Ensenada y el impuesto único de la Escuela Fisiocrática», *Moneda y Crédito*, junio, pp. 67-79.
- (1972): «Evolución histórica de la contribución directa en España desde 1700 hasta 1814», *Revista de Economía Política*, núm. 61, pp. 31-90.
- (1999): «Reformismo tributario ilustrado: Floridablanca, Vicente Alcalá Galiano y los Frutos Civiles», en Enrique FUENTES QUINTANA (1999b), pp. 569-575.
- LERENA, Pedro (1790): «Memoria sobre la naturaleza de las rentas públicas de España, número de empleados y sueldos que gozan, por don..., 1790», en José CANGA ARGÜELLES (1968), t. II, pp. 129-150.
- LÓPEZ CASTELLANO, Fernando (1995): *Liberalismo económico y reforma fiscal. La contribución directa de 1813*, Granada, Universidad de Granada/Fundación Caja de Granada.
- LÓPEZ JUANA PINILLA, José (1816): *Representación que dirige al Rey N. S. el Intendente D. ... sobre las medidas de organizar un sistema de la Real Hacienda*, Biblioteca del Ministerio de Hacienda, núm. 8511, 955.
- (1825): *Memoria de la Dirección General de Rentas de 1824*, Biblioteca del Ministerio de Hacienda, núm. 1160.
- (1840-1848): *Biblioteca de Hacienda de España*, Madrid, Imprenta de D. Eusebio Aguado, 6 tomos. Los tt. V y VI continuados por D. Domingo López de Castro y Pinilla, Intendente de 1.^a clase.
- LLOMBART, Vicente (1976): «A propósito de los intentos de reforma de la hacienda castellana en el siglo XVIII: Campomanes frente al proyecto de Única Contribución», *Hacienda Pública Española*, núm. 38, pp. 123-132.
- MARICHAL, Carlos (1997): «Beneficios y costes fiscales del colonialismo: las remesas americanas a España, 1760-1814», *Revista de Historia Económica*, núm. 3, pp. 475-505.
- MATEOS DORADO, Dolores (1981): «La única contribución y el Catastro de Ensenada (1749-1775)», en *La Época de Fernando VI*, Oviedo, pp. 227-240.
- (1990): «La Única Contribución y el Catastro durante la época carolina», *Hacienda Pública Española*, monografía núm. 2, pp. 47-57.

- MATILLA TASCÓN, Antonio (1947): *La única contribución y el catastro de la Ensenada*, Madrid, Servicio de Estudios del Ministerio de Hacienda.
- MERINO, José Patricio (1987): *Las cuentas de la Administración Central Española 1750-1820*, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, monografía núm. 50.
- OTAZU, Alfonso (1978): *La reforma fiscal de 1749-1779 en Extremadura*, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales.
- OZANAM, Didier (1980): «Representación del marqués de la Ensenada a Fernando VI (1751)», *Cuadernos de Investigación Histórica. Seminario Cisneros*, núm. 4, pp. 67-124.
- PERDICES, Luis, y REEDER, John (2000): *Diccionario de Pensamiento Económico en España (1500-1812)*, Madrid, Fundación ICO, Editorial Síntesis.
- PIEPER, Renate (1992): *La hacienda real bajo Fernando VII y Carlos III (1753-1788)*, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales.
- RIPIA, Juan de la, y GALLARD, Diego María (1795-1796): *Práctica de la administración y cobranza de las rentas reales, y visita de los ministros que se ocupan en ellas: por Juan de la Ripia, Contador por S. M. de la intervención de rentas reales de Almagro y Campo de Calatrava. Corregida con las nuevas cédulas, decretos y órdenes que no se habían publicado hasta aquí sobre las Rentas de que se trata, y añadida con las noticias correspondientes a las rentas del... Por el Licenciado Don Diego María Gallard, abogado de los Reales Consejos, académico de la Real Academia de Derecho Público de Santa Bárbara, socio de mérito de la Real Sociedad Patriótica de Segovia, y secretario de la Balanza de Comercio*, Madrid, tt. I (1795), II (1795), III (1796), IV (1796), en la oficina de Don Antonio Ulloa, con las licencias necesarias; t. V (1796), en la oficina de la viuda e hijo de Marín, con las licencias necesarias. La primera edición de la obra de Ripia es en Madrid, 1676; y posteriormente: Barcelona, 1694; Madrid, 1736 y 1768, edición de Bartolomé de Ulloa.
- SUREDA, José Luis (1949): *Las Haciendas castellanas y los economistas del siglo XVII*, Madrid, CSIC/Instituto de Economía Sancho de Moncada.
- (1999): «La Hacienda castellana en la literatura económica del siglo XVII», en Enrique FUENTES QUINTANA (1999a), pp. 523-543.
- TEDDE DE LORCA, Pedro (1989): «Política financiera y política comercial en el reinado de Carlos III», en *Actas del Congreso Internacional sobre «Carlos III y la Ilustración»*, t. II. Economía y Sociedad, Madrid, Ministerio de Cultura.
- (1998): «Una economía en transformación: de la Ilustración al Liberalismo», en José María JOVER ZAMORA (dir.), *Historia de España Menéndez Pidal*, t. XXX, Madrid, Espasa Calpe, pp. 335-424.
- ULLOA, Modesto (1977): *La hacienda real de Castilla en el reinado de Felipe II*, Madrid, Fundación Universitaria Española. La primera edición es de 1963.
- UZTÁRIZ, Gerónimo de (1968): *Theórica, y Práctica de Comercio, y de Marina, en diferentes discursos, y calificados exemplares, que, con específicas providencias, se procuran adaptar a la monarchia española, para su prompta restauración, beneficio universal, y mayor fortaleza contra los émulos de la real corona, mediante la soberana protección del Rey Nuestro Señor Don PhelipeV, por ..., caballero del Orden de Santiago del Consejo de su Majestad, y de la Real Junta de Comercio, y de Moneda y Secretario de su Majestad en el Consejo y Cámara de Indias*, Madrid, 1724.

Segunda edición, corregida y enmendada por el autor, Madrid, imprenta de Antonio Sanz, 1742; tercera edición corregida y enmendada por el autor, Madrid, imprenta de Antonio Sanz, 1757. Hay una reedición con introducción de Gabriel Franco, Madrid, 1968, Editorial Aguilar, que es la que he utilizado.

VALLADARES DE SOTOMAYOR, Antonio (1788): *Semanario Erudito, que comprende varias obras inéditas, críticas, morales, instructivas, políticas, históricas, satíricas y jocosas, de nuestros mejores autores antiguos, y modernos*, Madrid, por don Blas Román.

ZAFRA OTEYZA, Juan (1991): *Fiscalidad y antiguo régimen. Las rentas provinciales del reino de Granada (1476-1780)*, Madrid, Junta de Andalucía/Instituto de Estudios Fiscales.